

El crudo problema estructural

Solía decir el profesor Sampedro a sus alumnos de economía que «lo que dura es estructura y lo que no, coyuntura». Y me ha venido a la mente tanto para descartar que la situación actual de los precios del crudo petrolífero sea coyuntural como para decidir si poner o no una coma en el título. Y no es que falten argumentos para pensar que la elevación de los precios del crudo se deba a factores estructurales, como ahora intentaré argumentar, sino porque cada vez hay más datos a favor de que nuestro verdadero problema estructural es la crudeza de que apoyemos, cada vez más, el desarrollo económico y nuestra propia forma de vida sobre una base tan resbaladiza.

Basta observar la profusión de noticias en los medios para constatar la preocupación por demostrar que la escalada de precios del petróleo se debe a factores coyunturales, como la reducción de las reservas en los Estados Unidos, la especulación ante el temor a un desabastecimiento, las reticencias de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) a elevar sus exportaciones, los problemas militares y políticos de Irak que impiden su plena entrada en producción, o la creciente demanda de China e India. Y, sin embargo, la historia nos muestra un curioso paralelismo entre la situación actual, tras el final «oficial» de la guerra de Irak y las que desencadenaron los «shocks» de precios petrolíferos que hicieron tambalearse los fundamentos estructurales del sistema económico de mercado. En 1973, después de la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes y del embargo petrolífero subsiguiente de éstos a los Estados Unidos, en 1980 tras la guerra entre Irán e Irak, y en 1990 como consecuencia de la Guerra del Golfo. Se aduce ante esas similitudes que ahora las economías de los países desarrollados son capaces de asimilar los incrementos de precios por las vías de la racionalización del consumo y la elevación de la productividad. Además, se sigue insistiendo en la esperanza de que el fenómeno sea pasajero, y no sólo se han puesto en rápida explotación los pozos iraquíes (lo único que «la coalición» ha puesto empeño en reconstruir), sino que los dos principales países productores de la OPEP, Arabia Saudita e Irán, además de producir ya por encima de su cuota son «sensibles» a las presiones internacionales para que éste incremente su oferta actual de 23,5 millones de barriles diarios en otros dos adicionales. El problema es que incluso dándose ese escenario optimista, la OPEP sólo cubre el 38% de la demanda de los países desarrollados de Occidente, que otros países productores (como Angola y Rusia) tienen problemas técnicos y financieros para incrementar su producción, y que las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía para los próximos 30 años son de un incremento en la demanda superior a las dos terceras partes de la actual. Sin olvidar que el crecimiento económico de China e India ha incrementado las importaciones de petróleo de Asia en más de un 25% en el último año, y también la de productos siderúrgicos, lo que se ha traducido en una elevación de los precios de los fletes de imposible contención en el corto plazo.

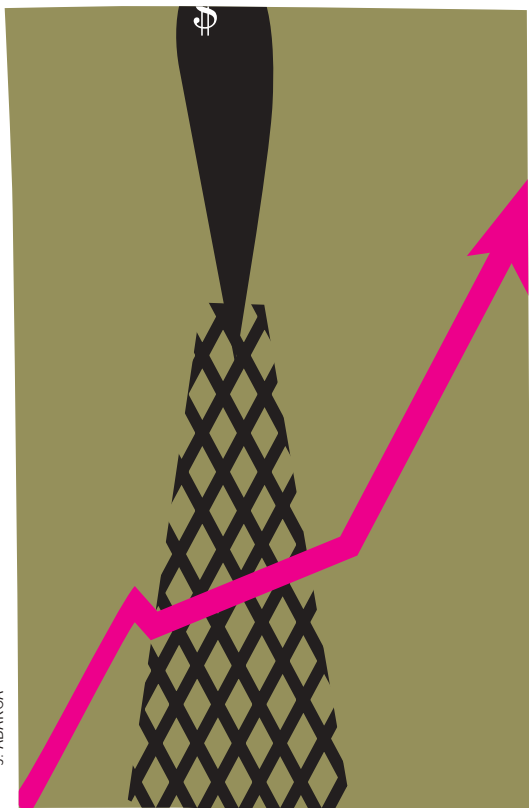
Y ahora entran en juego los argumentos tranquilizadores sobre la capacidad actual de las economías desarrolladas para asimilar el impacto de los mayores precios del petróleo, que se mueven además en un difícil equilibrio entre la necesidad de incrementar los tipos de interés, para contener las presiones inflacionistas que se generarán en cascada desde las empresas y sectores que dispongan de «poder de mercado» para trasladar mayores costes a precios, y la conveniencia de no modificar dichos tipos para no perjudicar la incipiente reactivación económica en los Estados Unidos y en Europa. Pero esa asimilación de los mayores precios del crudo no resisten la carga de la prueba en sectores como el de las aerolíneas, por ejemplo: su actual estructura de costes está diseñada para operar con un precio de entre 25 y 30 dólares

por barril, y precios como los vigentes de hasta 40 dólares, incrementarán su coste total en un 15%, que trasladarán más pronto que tarde a los precios de los pasajes. Nuestro país tampoco es un ejemplo de racionalidad en el uso de la energía: entre 1996 y 2001 su consumo final se incrementó en un 30% (7% en la UE), en tanto que el PIB crecía en igual período en el 21% (14% en la UE). Sin olvidar los habituales efectos sobre la vida cotidiana que suele conllevar la elevación de los precios energéticos, que van desde la alteración de la estructura de precios relativos de los diversos sectores, que motivan efectos de sustitución de factores cuyo uso pasa a ser ineficiente (la fabricación de determinados materiales de construcción es fuertemente intensiva en el uso de la energía petrolífera), hasta el desencadenamiento de una avalancha de peticiones de ayudas indi-

rectas a determinadas actividades (agricultura y transporte, que demandarán gasóleo con precio «profesional») que, en cualquier caso, intentarán trasladar la mayor factura energética a los precios finales que pagarán los usuarios. Con el problema añadido de que aminorar esos efectos requerirá actuaciones contrapuestas sobre los tipos de interés: mantenerlos frente a incrementarlos de forma gradual.

Es cierto que la situación no es tan dramática como la que se produjo con las primeras crisis petrolíferas, cuando en 1979 el precio del barril se situó también en 40 dólares en moneda corriente (80 en poder adquisitivo actual), pero el problema estructural de las economías desarrolladas es que se siguen basando en el petróleo relativamente barato. Es un crudo problema estructural que condiciona la capacidad industrial y el nivel de vida de los ciudadanos, y cuyos efectos nocivos sobre el medio ambiente tan sólo se han llegado a mercantilizar, mediante la implantación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en aplicación del principio «de quien contamina paga» (en lugar de «no se contamina aunque se pague»). Por eso, cuando todos y cada uno de nosotros experimentamos ya la reducción de nuestra renta disponible con el incremento de la factura energética, e incluso los próximos meses, en los que veremos el incremento de la inflación y la reducción del crecimiento económico, es una buena ocasión para buscar alternativas.

Juan Antonio Maroto Acín
Catedrático de Economía Financiera, UCM



J. ABRACA

CARTAS DE LOS LECTORES

El deporte universitario

He terminado la lectura del estupendo artículo titulado *El deporte universitario merece un esfuerzo*, que, por razones obvias de mi especialización periodística, comparto al cien por cien. El tema del deporte universitario, propio para una tesis doctoral, un seminario o curso, tiene que ver con la precariedad de recursos e iniciativas en la universidad española y, naturalmente, en la UCM. Que en 2004 el deporte universitario de la Complutense se mantenga con las mismas obsoletas instalaciones de 1948, salvo alguna curiosa excepción, es un síntoma de decadencia. El deporte universitario español, y en concreto el de la UCM, requiere de un análisis serio. Ser tratado como un enfermo que precisa de un médico de cabecera y una institución que apoye su curación. Que no hagan publicidad de él, quienes lo repudian o lo utilizan para intentar atraer alumnos. Esto no es Norteamérica. Nuestro *campus*, para que vamos a engañarnos, es reflejo de la España *cañí* de 2004; la del oro y grana de las iluminaciones verbeneras; el *porro* patrocinado por un ilustre profesor, o el *botellón* y el pitillo alentado por las firmas de bebidas y tabaco que inundan las páginas de las llamadas revistas universitarias. Quizá por todo eso, y algo más, el deporte universitario de España, y de la UCM, es *cutre* y *da pena*.

Antonio Alcoba. Director del Curso Deporte y Comunicación.

Universidad e iglesia

Hay gran acuerdo en que la Universidad debe ser una institución pública que propicie el progreso de la especie humana. La aplicación de este programa, en el ámbito de las universidades de nuestro estado, no puede obviar la circunstancia de que España no sufrió los efectos de un movimiento ilustrado; no se produjo la crisis que en otros lugares supuso en los siglos XVIII y XIX el abandono del antiguo régimen con la ulterior consideración del individuo social como ciudadano en lugar de como súbdito. Reflejo de este hecho es la inexistencia en la Constitución de 1978 de la separación Estado-Iglesia a través de un principio constitucional de laicidad, y consecuencia de esta realidad es la financiación del clero católico con una parte de los fondos pú-

blicos, como si de un cuerpo funcional se tratase, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Si la Universidad debe ser un motor de la sociedad, la UCM haría bien en trabajar también por superar la confusión del Estado con la Iglesia construyendo, avivando y protegiendo el movimiento ilustrado que nunca culminó aquí, en lugar de permanecer anclada en formulaciones propias del Nacional-Catolicismo. Y la primera actuación tendría que ser en el sentido de revisar la relación institucional que mantiene la UCM con la Iglesia católica, relación que debería ser de idéntico estatuto que la que mantendría con organizaciones como Amnistía Internacional o Attac, por poner sólo dos ejemplos. Su primer planteamiento práctico, la transformación de las capillas en espacios públicos propios de una universidad moderna y la suspensión de sus clérigos gestores cuyos sueldos salen de las arcas públicas; la Universidad no está para proporcionar asistencia de carácter religioso. El laicismo es hoy más necesario que nunca.

Rubén Fernández-Salineró Palomo. 4º de Ciencias Físicas

Almudena Grandes

Acabo de leer el artículo titulado «La ley de la Caverna» que publicaba la escritora Almudena Grandes en la sección de Opinión de la edición del 20 de abril. Me ha sorprendido que en *Tribuna Complutense* se aborde un tema tan importante, complejo y que también afecta a la vida universitaria como la LOCE con la simple publicación de ese pobre panfleto, a medio camino entre *Cuéntame* y *Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así*, carente del más mínimo análisis objetivo. Me parece una muestra más del tradicional desinterés del mundo universitario hacia los problemas de la educación pre-universitaria, aunque ahora tome esta forma de demagogia mitinera. Si de verdad interesa la problemática de la enseñanza secundaria, no parece lo más adecuado limitarse a publicar las sensaciones de quien confiesa que «un instante antes de que diera comienzo mi intervención en aquel acto —por la coeducación y contra la LOCE— leí un resumen de los contenidos de la LOCE».

Antonio Espigares Pinilla
Profesor Asociado de la Facultad de Filología

Las cartas para esta sección no deberán exceder de 20 líneas mecanografiadas y deben enviarse a: gcm@rect.ucm.es. o «Tribuna Complutense», C/Donoso Cortés, 63, 6ª planta, con la indicación «Sección de Cartas de los lectores». Los escritos deberán ir firmados, con indicación del nombre y dos apellidos del autor o autores, domicilio, teléfono de contacto y DNI. «Tribuna Complutense» se reserva el derecho de publicar las cartas, así como de resumirlas.